



REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso:	Ordinario Laboral
Radicación:	05001-31-05-016-2019-00663-01
Demandante:	Luz Amparo González Escobar
Demandado:	Colpensiones y Protección S.A.
Asunto:	Apelación y Consulta
Procedencia:	Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín
Magistrada ponente:	Sandra María Rojas Manrique
Temas:	Ineficacia afiliación al RAIS

Medellín, junio veinticuatro (24) de dos mil veintidós (2022)

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES, en ausencia justificada, VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como magistrada sustanciadora, procede, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 Decreto Legislativo 806 de 2020, en concordancia con el artículo 14 de la Ley 2213 de 2022, a decidir el recurso de apelación interpuesto por la señora apoderada de Protección S.A., así como el grado jurisdiccional de Consulta en favor de Colpensiones, respecto de la sentencia proferida por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, el 26 de abril del año 2022, en el proceso ordinario laboral de primera instancia instaurado por la señora LUZ AMPARO GONZALEZ ESCOBAR en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES y de la

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PROTECCIÓN S.A., Radicado 05001-31-05-016-2019-00663-01.

1.- ANTECEDENTES

1.1.- DEMANDA

La señora LUZ AMPARO GONZALEZ ESCOBAR, promovió demanda ordinaria laboral contra COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A., pretendiendo se declare la ineficacia del traslado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, declarándose que se encuentra válidamente afiliada al Régimen de Prima Media, en consecuencia se condene a Protección S.A., a trasladar a Colpensiones, los aportes en pensión, las sumas adicionales, frutos e intereses y se le ordene a esta última validar los aportes e incorporarlos a la historia laboral.

Como fundamento de dichas pretensiones, se informó que la señora Luz Amparo González Escobar nació el 27 de junio de 1964, que comenzó a realizar cotizaciones al ISS el 13 de junio de 1990, trasladándose a Protección S.A., el 19 de febrero de 1998, aduciendo que para dicha afiliación no contó con una asesoría y que el fondo de pensiones omitió poner en conocimiento de la actora información trascendental para configurar un consentimiento debidamente informado.

1.2.- CONTESTACIÓN

Por conducto de su representante legal y a través de apoderada, oportunamente **COLPENSIONES**, dio respuesta al libelo introductorio, indicando que es cierto lo relacionado con la fecha de nacimiento de la demandante y que no le consta los demás hechos por tratarse de situaciones personales de la demandante y referentes a un tercero ajeno a la entidad.

En oposición a las pretensiones formuló las excepciones de inexistencia de la obligación demandada y falta de derecho para pedir; imposibilidad jurídica para cumplir con las obligaciones pretendidas; buena fe; prescripción y la innominada o genérica.

PROTECCIÓN S.A., al replicar la demanda, indicó que es cierta la fecha de nacimiento de la actora, que no le consta la afiliación al ISS y que no es cierto lo narrado en relación al traslado de régimen pensional, sosteniendo en su defensa que a la demandante se le brindó una asesoría integral y completa respecto de todas las implicaciones de su decisión, sin omitir información e indicando claramente todas las características, regulaciones del régimen, su funcionamiento y los rasgos diferenciadores del Régimen de Prima Media, correspondiendo al afiliado realizar su propio juicio de favorabilidad.

Con el fin de enervar las suplicas de la demanda propuso las excepciones de inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir; buena fe; prescripción; aprovechamiento indebido de los recursos públicos y del sistema general de pensiones; reconocimiento de restitución mutua en favor de la AFP; inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa; inexistencia de la obligación de devolver la prima del seguro previsional cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa y porque afecta derechos de terceros de buena fe y la innominada o genérica.

1.3.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO

Mediante fallo proferido el 26 de abril del año 2022, el Juzgado de conocimiento declaró la ineficacia de la afiliación de la actora, suscrita el 19 de febrero de 1998 a Protección S.A., declarando, para todos los efectos legales, que la afiliada nunca se trasladó al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y siempre permaneció en el Régimen de Prima Media; ordenó a Protección S.A., trasladar a la actora a Colpensiones y devolver a esta última

todos los dineros que hubiere recibido con motivo de la afiliación, incluyendo las cotizaciones, bonos pensionales, cualquier suma adicional, frutos e intereses, sin que pueda retener los gastos de administración, ni aportes de solidaridad, ni ningún concepto, pues se considera que en ningún momento debió producir efectos jurídicos el traslado, concediendo para ello, el término de 30 días siguientes a la ejecutoria de la providencia; ordenó a Colpensiones reactivar la afiliación de la demandante y recibir los dineros que deberá trasladar Protección S.A., autorizando a Colpensiones realizar un cálculo de equivalencia, de los dineros recibidos del Régimen de Ahorro Individual, de forma tal que no le genere perjuicio alguno recibir a la reclamante al momento de cumplir con sus obligaciones pensionales y condenó en costas a Protección S.A.

1.4.- RECURSO DE APELACIÓN

Protección S.A.

La apoderada de la entidad interpuso recurso de apelación en relación a la condena a trasladar las cuotas de administración, el seguro previsional y en cuanto a la orden del cálculo de equivalencia, teniendo en cuenta que la entidad hizo una buena gestión de administración de los recursos de la demandante y por lo tanto tiene derecho a conservar la comisión de administración cobrada.

Respecto de la prima de seguro previsional, sostuvo que esa prima fue trasladada a una aseguradora, que es un tercero de buena fe y por lo tanto la entidad no tiene como recobrársela, apelando la disposición de que deba ser Protección S.A., quien de su propio patrimonio pague esa prima del seguro previsional porque sería un perjuicio en contra de la entidad que no tiene sustento jurídico ni factico.

Finalmente, en cuanto al cálculo de equivalencia, no hay ninguna diferencia que pueda presentarse entre lo que pagaría en Colpensiones y en Protección S.A., por cuanto los rendimientos por sí solos cubren cualquier diferencia que pueda existir.

1.5.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal para presentar alegatos, se pronunció la apoderada de Colpensiones, solicitando que no se acoja la sentencia de primera instancia, en tanto que la demandante no puede trasladarse atendiendo lo estipulado en el artículo 2° de la Ley 797 de 2003, suplica igualmente que se tenga presente lo establecido en el artículo 48 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2005, donde se estableció el principio de sostenibilidad financiera, pues la declaración injustificada de la ineficacia de traslado afecta dicha sostenibilidad del sistema general de pensiones y pone en peligro el derecho fundamental a la seguridad social de los demás afiliados.

2. CONSIDERACIONES

2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, entendiendo que las partes quedaron conformes con los demás aspectos decididos; de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984; los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

De igual forma procede la consulta, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social que dispone “*También serán consultadas las sentencias de primera instancia cuando fueren*

totalmente adversas a la Nación, al Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las que la Nación sea garante”.

2.2.- HECHOS ESTABLECIDOS EN EL TRÁMITE DE LA INSTANCIA

Quedaron acreditados en el trámite del proceso y no son objeto de controversia los siguientes hechos:

- Que la señora LUZ AMPARO GONZALEZ ESCOBAR nació el 27 de junio de 1964, tal y como se desprende de la copia del registro civil de nacimiento obrante a folio 7 del anexo 003 del expediente digital.
- Que la actora se trasladó del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, a través de la AFP Protección S.A. el 19 de febrero de 1998, con fecha de efectividad del 1º de abril de la misma anualidad, de conformidad con el formulario de afiliación visible a folio 20 del anexo 003 del expediente digital.
- Que la pretensora acredita un total de 1416.21 semanas cotizadas, conforme a la historia laboral expedida por la AFP Protección S.A. el 13 de agosto del 2020 aportada a folios 11 a 27 del anexo 011 del expediente digital.

2.3.- PROBLEMAS JURIDICOS A RESOLVER

Debe determinar la Sala:

¿Si se encuentra ajustada a derecho la sentencia objeto de apelación y de consulta, proferida en el presente proceso por el señor Juez Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, determinando para tal fin, si es ineficaz la afiliación al

Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, administrado por Protección S.A., efectuada por la demandante el 19 de febrero de 1998?

¿Si como consecuencia de la ineficacia, debe ordenarse a Protección S.A., el traslado de las cuotas de administración, aportes al Fondo de Garantía Mínima y los seguros previsionales?

¿Si se encuentra ajustada la autorización dada a Colpensiones para realizar el cálculo de equivalencia?

2.4.- TESIS

Los problemas jurídicos planteados se resuelven bajo la tesis según la cual i) es ineficaz el acto de afiliación por incumplimiento del deber de información y por lo tanto debe ordenarse el traslado de todos los conceptos que afectaron el valor de la cotización obligatoria de la demandante, ii) no hay lugar a la realización de cálculos de equivalencia por parte de Colpensiones, en consecuencia, la sentencia debe ser ADICIONADA en el numeral tercero, a fin de precisar que Protección S.A., debe trasladar a Colpensiones los aportes al Fondo de Garantía Mínima y los descuentos por seguros previsionales, además de las comisiones de administración, en forma indexada, PARCIALMENTE REVOCADA en el numeral cuarto, en relación a la autorización para la realización del cálculo de equivalencia y CONFIRMADA en lo demás.

2.5.- PREMISAS NORMATIVAS

El modelo pensional adoptado en Colombia a través de la Ley 100 de 1993, permitió la concurrencia de dos regímenes pensionales, excluyentes, el régimen público de Prima Media con Prestación Definida, administrado por el extinto Instituto de Seguros Sociales y algunos Fondos y Cajas de Previsión del sector Público y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad administrado por

los Fondos Administradores de Pensiones, entidades financieras de carácter privado. (artículo 12)

El Régimen de Prima Media con Prestación Definida está caracterizado en los artículos 31 y 32 de la ley 100 de 1993, como un régimen en el cual las prestaciones que obtienen los afiliados o sus beneficiarios están previamente definidas por el legislador, donde los aportes de todo los afiliados constituyen un fondo común de naturaleza pública, con el cual se financia las prestaciones de quienes tengan la calidad de pensionados en cada vigencia y en el cual el Estado es quien tiene a su cargo la garantía de las pensiones a que se hacen acreedores los afiliados en este régimen, que se concreta a través del subsidio estatal.

Por su parte, el Régimen de Ahorro Individual, tal como lo define el artículo 59 del estatuto general de pensiones, está fundamentado en el ahorro proveniente de las cotizaciones y sus respectivos rendimientos financieros, el reconocimiento de la pensión y el monto de la misma está determinado por el capital acumulado, que debe ser el necesario para financiar una pensión mensual, superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente para 1994 y reajustado anualmente según la variación porcentual de IPC. La solidaridad opera en relación con la garantía de la pensión mínima legal, que da derecho a que el Estado complete la parte que haga falta para financiar una pensión mínima de vejez.

En este contexto de dualidad, el literal b) del artículo 13 de la ley 100 de 1993, establece como característica del sistema general de Pensiones, la libertad de selección de régimen en los siguientes términos *“la selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para el efecto manifestara por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1° del artículo 271 de la presente ley”*.

A su vez, el artículo 271 ibidem establece que: *“El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral se hará acreedor, en cada caso y por cada afiliado, a una multa impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder cincuenta veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.”* (subraya de la Sala)

El deber de brindar información completa, comprensible y veraz de las administradoras de Fondos de Pensiones, es consustancial a la actividad de estas entidades de carácter financiero y así fue establecido desde la vigencia misma del Régimen de Ahorro Individual, por el artículo 97 del estatuto financiero vigente para la época, decreto 663 de 1993, el artículo 4 del decreto 656 de 1994 y los artículos 10 y 12 del decreto 720 de 1994.

Posteriormente, el legislador ha regulado el contenido de la información que debe ser brindada a los potenciales afiliados, por parte de los Fondos de Pensiones; véase la ley 1328 de 2009, el decreto reglamentario 2555 de 2010, la ley 1748 de 2014, el decreto 2071 de 2015 y la circular 016 de abril 16 de 2016 de la Superintendencia Financiera, dentro del cual se incluye las reglas de funcionamiento, ventajas y desventajas de ambos regímenes, el análisis de la situación particular del afiliado, proyecciones financieras de la futura pensión y la obligatoriedad de la doble asesoría para eventos de traslado.

En esta misma dirección, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha consolidado una línea jurisprudencial reiterada y uniforme, en torno al deber permanente e ineludible de información que concierne a las administradoras pensionales, como condición de eficacia del traslado de régimen; según la cual la afiliación desinformada produce la ineficacia del acto; correspondiendo a las AFP la carga probatoria de demostrar que entregaron al afiliado la información

objetiva sobre la actividad de cada uno de los regímenes pensionales, para obtener un verdadero consentimiento.

Dan cuenta del precedente en referencia, los siguientes pronunciamientos SL, Rad, 31989 del 08 de septiembre de 2008; SL Rad. 31314 del 08 de septiembre de 2008; SL, Rad 33083 del 22 de noviembre de 2011; SL31314 del 06 de diciembre de 2011, SL 19447 del 27 de septiembre de 2017; SL 17595 del 19 de octubre de 2017, SL 413 del 21 de febrero de 2018; SL4964 (54814) del 14 de noviembre de 2018; SL 4989 del 14 de noviembre de 2018, SL 1452 del 03 de abril de 2019; SL1421 del 10 de abril de 2019; SL1688 del 08 de mayo de 2019; SL 1689 del 08 de mayo de 2019; SL3464 del 14 de agosto de 2019; SL 4360 del 09 de octubre de 2019; SL4426 del 16 de octubre de 2019; SL1611 del 01 de julio de 2020; SL 2877 del 29 de julio de 2020 y más recientemente en las sentencias SL SL1442 del 21 de abril de 2021, SL3349 del 07 de julio de 2021 y SL 637 del 11 de mayo de 2022.

De acuerdo con la ratio decidendi de las sentencias de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, es indiscutible que, para resolver el problema jurídico atinente a la validez o eficacia de las afiliaciones al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, debe aplicarse las dos sub reglas principales establecidas por el máximo Tribunal de la jurisdiccional ordinaria laboral, esto es i) el deber profesional, permanente e ineludible de información que tienen las administradoras de pensiones y ii) la inversión de la carga de la prueba, que les traslada la responsabilidad de acreditar que entregaron al afiliado la información necesaria para adoptar una decisión consciente.

2.6.- CASO CONCRETO

En el caso concreto, se establece que la señora LUZ AMPARO GONZALEZ ESCOBAR, se trasladó del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, a través de la AFP

Protección S.A. el 19 de febrero de 1998, con fecha de efectividad del 1° de abril de la misma anualidad, de conformidad con el formulario de afiliación obrante a folios 20 del anexo 003 del expediente digital, no obstante, dicho formulario de afiliación no dan cuenta de la información que fue brindada a la accionante, tal y como lo ha indicado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia *“Como en muchísimas ocasiones lo ha sostenido esta Corte, dicha carga no se suple con la firma del formulario o porque en el mismo se utilicen leyendas o afirmaciones tales como «la afiliación se hace libre y voluntaria», «se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones» u otras similares. Esos formalismos, a lo sumo, acreditan un consentimiento sin vicios, pero no informado”* (sentencia SL3871 de 2021); por ello no puede inferirse la voluntariedad de la afiliación en los términos del artículo 11 del Decreto 692 de 1994.

Del interrogatorio de parte practicado a la demandante, no se deriva prueba de confesión, en tanto que la misma indicó que en el año anterior a 1998 había acabado a entrar a una empresa multinacional, la cual tenía una relación cercana con el grupo de Protección S.A., llevaron un formulario para que lo firmara y firmó, insistiendo que no hubo asesoría, que solo le dijeron que sería más beneficioso y que la pensión era heredable.

Se sigue de lo anterior, que, si bien la demandante se trasladó de manera libre y voluntaria, ello lo hizo sin haber recibido la información adecuada, sin conocer las características, el funcionamiento del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, las consecuencias del traslado, ni las desventajas de dicho régimen pensional.

Aunado a lo anterior, advierte esta Colegiatura que no existe medio de convicción alguno, a partir del cual pueda establecerse que en su momento Protección S.A., cumpliera con el deber profesional de información, para garantizar la decisión libre, voluntaria e informada de la afiliada, sobre las implicaciones de su afiliación.

En este escenario probatorio, ante la ausencia de medios de prueba que den cuenta de la información que brindó Protección S.A. a la demandante, al momento de efectuarse el traslado, no era posible una decisión distinta a la declaratoria de la ineficacia de la afiliación, sin que sea imposibilidad para ello que la accionante se encuentre inmersa en la prohibición contemplada en el artículo 2° de la Ley 797 de 2003, como lo pretende la apoderada de Colpensiones en sus alegatos, en tanto que, el retorno de la misma al Régimen de Prima Media se da como consecuencia de la declaratoria de ineficacia de la afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

Sobre los efectos de la ineficacia

La ineficacia supone que el acto no produce efectos jurídicos, como si no hubiese existido, por lo tanto, no pueden excluirse del traslado, las comisiones de administración, los seguros previsionales, ni los aportes al Fondo de Garantía Mínima, teniendo en cuenta que estos afectaron el valor de la cotización de la demandante y al ser declarada la ineficacia, los pagos y deducciones, quedan sin causa jurídica, debiéndose trasladar el aporte completo al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, para garantizar el financiamiento de la futura pensión de la actora.

No puede afectarse, además, el fondo común de naturaleza pública del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, con la disminución de la cotización en favor de la administradora accionada, teniendo en cuenta, que fue Protección S.A., quien dio lugar a la sanción del acto jurídico, en virtud del incumplimiento al deber de información y siendo ésta, la entidad en la cual se encuentra vigente la afiliación de la actora, por lo tanto, debe asumirlo aun de su propio patrimonio, conforme al artículo 963 del Código Civil.

De otra parte, los rendimientos generados, mientras estuvo activa la afiliación, son de propiedad de la demandante y no de los Fondos, aunado a ello, tampoco resultan ajenos al régimen administrado por Colpensiones, conforme

al literal b) del artículo 32 de la Ley 100 de 1993, dado que el fondo común también se integra por rendimientos de las cotizaciones de los afiliados y por lo tanto no pueden compensar los gastos administrativos.

Los aportes al Fondo de Garantía Mínima, cuya aplicación es exclusiva del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, deben ser trasladados conforme al artículo 7 del decreto 3995 del 2008 y las sentencias SU 062 de 2010 y SU 130 de 2013, destacando que la diferencia entre el ahorro y la cotización cuando se trata de traslado permitido legalmente, debe ser asumida por el afiliado, no así cuando, como en el sub lite, se trata de la sanción al acto jurídico por incumplimiento de la AFP al deber de información.

Ahora, en cuanto a los porcentajes de seguros previsionales, si bien los mismos ampararon los riesgos de invalidez y muerte en vigencia de la afiliación de la pretensora, también generaron la disminución de la cotización y al quedar sin efecto la afiliación, también deben ser trasladados, siendo claro que, al no estar estos conceptos dentro de la cuenta de ahorro individual de la demandante, deben ser trasladados con cargo a los propios recursos de la AFP demandada y por lo tanto no afectan los pagos realizados a la respectiva aseguradora.

Respecto a los conceptos que deben ser trasladados como consecuencia de la declaratoria de ineficacia del traslado al RAIS, se pronunció la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en las sentencias SL2877 del 29 de julio de 2020 y SL 3034 de 2021, última en la cual sobre el punto se indicó:

“Resultan suficientes las consideraciones vertidas en sede extraordinaria para denegar prosperidad a la alzada y al surtir el grado jurisdiccional de consulta, se advierte que el restablecimiento pleno o completo, como consecuencia de la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional, en los términos de la sentencia CSJ SL2877-2020, requiere especificar y detallar algunas de las condenas impartidas por el a quo, razón por la cual se procederá a CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Veintisiete Laboral del Circuito de Bogotá, el 03 de diciembre de 2018, precisando y adicionando el ordinal segundo en el sentido de que Old Mutual SA, además, deberá

trasladar a Colpensiones, lo recaudado por comisiones y gastos de administración debidamente indexados durante todo el tiempo que la accionante permaneció en el RAIS, así como los valores utilizados en seguros previsionales y los emolumentos destinados a constituir el fondo de garantía de pensión mínima”.

Ahora bien, en la parte resolutive de la sentencia revisada, se tiene que el a quo ordenó a Protección S.A., trasladar a Colpensiones todos los dineros que hubiere recibido con motivo de la afiliación de la actora, incluyendo las cotizaciones, bonos pensionales, cualquier suma adicional, frutos e intereses, sin que pueda retener los gastos de administración, ni aportes de solidaridad, entendiendo la Sala que al hacer referencia a las sumas adicionales, se refiere a las primas de seguros previsionales, sin embargo, estima procedente la Sala ADICIONAR el numeral tercero de la providencia, en el sentido de señalar que Protección S.A., además de los dineros de la cuenta de ahorro individual de la actora y los rendimientos, deberá trasladar a Colpensiones los gastos de administración y comisiones, incluidos los aportes para el fondo de garantía de pensión mínima y las primas de los seguros previsionales.

Adicional a lo expuesto y atendiendo, a que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras en las sentencias SL 5236, SL 5285, SL5337, SL5525, SL5543 de 2021, SL950 y SL 1637 de 2022 ha adoctrinado que la indexación de las cuotas de administración, los aportes al Fondo de Garantía Mínima y las cuotas por seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia que debe reintegrar la AFP es un efecto propio de la declaratoria de ineficacia, con el cual se busca no afectar la estabilidad financiera de Colpensiones, se adicionará el referido numeral, en el sentido de ordenar a Protección S.A., la indexación de dichos rubros.

Finalmente, se advierte procedente acceder a la revocatoria parcial del numeral cuarto de la sentencia, por medio del cual se autorizó a Colpensiones a realizar un cálculo de equivalencia, en tanto que, no se acreditó en el proceso un detrimento en el capital de la cuenta de ahorro individual de la actora,

contrario a ello y conforme al documento obrante a folios 29 del anexo 011 del expediente digital, se tiene que los aportes de la gestora del proceso ascienden a \$85.201.484 y los rendimientos a \$219.934.404.25, (258%), siendo claro que con dichos rendimientos se suple cualquier diferencia que pueda presentarse en las cotizaciones que hubiera recibido Colpensiones y adicionalmente no se puede desconocer que con la orden impuesta a Protección S.A., de trasladar aportes, rendimientos, comisiones de administración, seguros previsionales y aportes al fondo de garantía de pensión mínima, los tres últimos indexados, se está garantizando que Colpensiones reciba todos los valores que la misma hubiere recibido, en el evento en el que la accionante, siempre hubiere estado afiliada a esa entidad.

Sin costas en esta instancia por no causarse y en atención a la prosperidad parcial del recurso de alzada

3.- DECISION

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA:

1.- Se **ADICIONA** el numeral tercero de la sentencia de primera instancia proferida el 26 de abril de 2022, por el Juzgado Dieciséis Laboral de Circuito de Medellín, en el proceso ordinario instaurado por la señora LUZ AMPARO GONZALEZ ESCOBAR en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES y de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., en el sentido de indicar que Protección S.A., además de los dineros de la cuenta de ahorro individual de la actora y los rendimientos, deberá trasladar a Colpensiones los gastos de administración y comisiones,

incluidos los aportes para el fondo de garantía de pensión mínima y las primas de los seguros previsionales, debidamente indexados.

2.- Se **REVOCA PARCIALMENTE**, el numeral cuarto de la providencia confutada, en cuanto autorizó a Colpensiones a realizar un cálculo de equivalencia, para en su lugar, declarar que no hay lugar al mismo.

3.- Se **CONFIRMA** la sentencia en lo demás.

4.- Sin **COSTAS** en esta instancia.

5.- Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3° literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el auto AL 2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,


SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE

JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES
En ausencia justificada


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO